



# Asamblea General

Distr. general  
9 de julio de 2021  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 90º período de sesiones, 3 a 12 de mayo de 2021

**Opinión núm. 20/2021, relativa a Douglas Tumuhimbise, Andrew Kibalama, Saddam Kateregga, Raj Jjuuko, Kelvin Kugonza, Denis Ssamula, Abbey Gwanvu, Henry Mukiibi, Kareem Yiga, Harris Tevin Kifuba, Jabel Tushabomwe, Ivan Kawooya, Ashiraf Walugembe, Jackson Mayanja, James Tendibwa, Mark Muhereza, Joel Oketch, Ronald Ssenyonga y Rodney Sheema (Uganda)**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo<sup>1</sup>, el Grupo de Trabajo transmitió el 30 de diciembre de 2020 al Gobierno de Uganda una comunicación relativa a Douglas Tumuhimbise, Andrew Kibalama, Saddam Kateregga, Raj Jjuuko, Kelvin Kugonza, Denis Ssamula, Abbey Gwanvu, Henry Mukiibi, Kareem Yiga, Harris Tevin Kifuba, Jabel Tushabomwe, Ivan Kawooya, Ashiraf Walugembe, Jackson Mayanja, James Tendibwa, Mark Muhereza, Joel Oketch, Ronald Ssenyonga y Rodney Sheema. El Gobierno respondió a la comunicación el 18 de febrero de 2021. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por

<sup>1</sup> A/HRC/36/38.



los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

4. Douglas Tumuhimbise, Andrew Kibalama, Saddam Kateregga, Raj Jjuuko, Kelvin Kugonza, Denis Ssamula, Abbey Gwanvu, Henry Mukiibi, Kareem Yiga, Harris Tevin Kifuba, Jabel Tushabomwe, Ivan Kawooya, Ashiraf Walugembe, Jackson Mayanja, James Tendibwa, Mark Muhereza, Joel Oketch, Ronald Ssenyonga y Rodney Sheema son nacionales de Uganda. En el momento de su detención, estas 19 personas tenían entre 19 y 32 años y eran homosexuales, bisexuales o transgénero.

#### a) Contexto

5. La fuente explica que, aunque el Tribunal Constitucional anuló la Ley contra la Homosexualidad en 2014, las conductas homosexuales consentidas siguen siendo ilegales en virtud de una disposición del Código Penal de la época colonial que tipifica como delito el acceso carnal de cualquier persona contra natura y prevé penas que van hasta la reclusión a perpetuidad. Además, aunque la ley no restringe expresamente las libertades de expresión o de reunión pacífica por motivos de orientación sexual o identidad de género, el Gobierno ha restringido gravemente estos derechos en el caso de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.

6. La ley no prohíbe la discriminación de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en materia de vivienda, empleo, leyes de nacionalidad o acceso a los servicios gubernamentales. Estas personas sufren discriminación, restricciones legales, acoso social, violencia e intimidación. Al parecer, las autoridades perpetúan la violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, bloquean las reuniones organizadas por estas personas y los activistas y las detienen y encarcelan arbitrariamente de forma rutinaria. Asimismo, según las informaciones disponibles, los agentes de policía siguen realizando exploraciones anales forzadas a hombres y mujeres transgénero acusados de conductas homosexuales consentidas.

7. La fuente también informa de que, en los últimos meses, la violencia y la discriminación contra personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero han alcanzado niveles alarmantes. Al parecer, en 2019 algunos diputados preveían presentar un proyecto de ley que tipificara como delito “la promoción y el reclutamiento” por personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero y castigara con la pena de muerte los actos homosexuales “graves” consentidos. También se denunciaron detenciones masivas de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.

#### b) Detención y privación de libertad

8. Según la fuente, el 29 de marzo de 2020, el alcalde de Nsangi y varios agentes de seguridad hicieron una redada en un centro para personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero gestionado por la Children of the Sun Foundation en la ciudad de Kyengera. Durante la redada, los agentes detuvieron a 23 personas, incluidas las 19 a las que se refiere la comunicación, sin presentar ninguna orden de detención. De las 23 personas detenidas, 13 residían en el centro, 5 venían de visita de otro centro, 1 era huésped de un residente y 1 era un enfermero residente. La fuente afirma que la policía actuó de forma selectiva

contra este centro y detuvo arbitrariamente a las personas por su orientación sexual e identidad de género, reales o percibidas.

9. Según un comunicado de la policía emitido el día después de la detención, las personas fueron detenidas por violar las órdenes de confinamiento y las directivas de distanciamiento físico establecidas en Uganda para frenar la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). La fuente explica que, el 21 de marzo de 2020, el Presidente de Uganda emitió una directiva detallada sobre las medidas preventivas que debían adoptarse contra la propagación del virus. La directiva ordenaba específicamente que la población permaneciera en su domicilio y prohibía las reuniones de más de diez personas.

10. Se ha informado de que estas personas fueron detenidas por la presunta violación de esas directivas, y que fueron acusadas de cometer “actos negligentes susceptibles de propagar una enfermedad”, en contravención del artículo 171 del Código Penal, y de “desobediencia de una orden legítima”, en contra del artículo 117 del Código Penal, aunque la acusación formulada con arreglo al artículo 117 se retiró posteriormente.

11. La fuente especifica que, tras mantener a las 23 personas bajo custodia durante una noche, la policía liberó a 4 de ellas el 30 de marzo de 2020 por motivos de salud. Las 19 restantes fueron procesadas y permanecieron en prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Kitalya hasta el 28 o el 29 de abril de 2020.

12. Según la fuente, la policía hizo una redada en el refugio y detuvo a las personas por infringir la directiva presidencial, aunque en el momento de su detención cumplían plenamente las restricciones relacionadas con la COVID-19. Como se ha explicado anteriormente, 13 de las personas privadas de libertad eran residentes del centro y se encontraban pacíficamente en él cuando la policía efectuó una redada en su domicilio y los detuvo. Las 6 restantes, aunque no residían en el centro, tampoco infringían la ley, dado que, aunque la directiva presidencial limitaba el número de personas permitidas en una reunión, no establecía límites en cuanto al número de personas que podían estar en una vivienda particular o en un centro privado.

13. En su comunicado inicial tras las detenciones, la policía afirmó que había hecho una redada en el centro y había detenido a las personas por incumplir las restricciones relacionadas con la COVID-19. Sin embargo, los informes pusieron de manifiesto más tarde que la policía había acusado a las personas de “acceso carnal” en contravención del artículo 145 del Código Penal, que tipifica como delito las relaciones homosexuales.

14. La fuente indica que la policía acusó a las personas en virtud de esa disposición a pesar de no haber visto a nadie mantener relaciones sexuales en el momento de la redada y las detenciones. En las imágenes de la redada difundidas en los medios de comunicación locales aparecían vecinos del centro y dirigentes de la zona declarando que estaban preocupados por el “comportamiento homosexual” de los jóvenes del centro. Al parecer, en las imágenes también se veía al alcalde de Nsangi azotar e insultar a dos de los residentes del centro mientras les obligaba a admitir que eran homosexuales.

15. También se ha señalado que, tras las detenciones, se llevó a cabo un registro en el centro para encontrar “pruebas de homosexualidad”. Algunos de los objetos recuperados y conservados como pruebas eran varios frascos de medicamentos antirretrovíricos que se utilizan habitualmente como profilaxis anterior a la exposición, dos kits de autodiagnóstico oral del VIH y varios preservativos.

16. La fuente explica además que, aunque, tras su comparecencia ante el Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Mpigi el 31 de marzo de 2020, se retiró la acusación contra las 19 personas de “desobediencia de una orden legítima” en contravención de lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal, estas permanecieron en prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Kitalya hasta el 28 o el 29 de abril de 2020.

17. Al parecer, el Servicio Penitenciario de Uganda denegó a las 19 personas el acceso a sus abogados. Seguidamente, estos impugnaron la legalidad de esa denegación ante el Tribunal Superior, que decretó la tramitación urgente del asunto. Los abogados también presentaron una solicitud de libertad bajo fianza ante el Tribunal de Primera Instancia de Mpigi, en Nsangi, pero no se fijó ninguna fecha para la audiencia.

18. La fuente añade que la audiencia señalada para el 28 de abril de 2020 no se celebró. Las 19 personas no fueron llevadas al tribunal para la audiencia y no comparecieron ni el juez ni el fiscal. Si son declaradas culpables en virtud del artículo 171 del Código Penal, estas personas podrían enfrentarse a una pena de hasta siete años de prisión.

c) Análisis jurídico

19. La fuente afirma que la reclusión de las 19 personas constituye una privación arbitraria de su libertad que se inscribe en las categorías I, III y V del Grupo de Trabajo.

i) Categoría I

20. La fuente señala, en primer lugar, que la privación de libertad de las 19 personas es arbitraria con arreglo a la categoría I, dado que los cargos que se les imputan son infundados y no pueden utilizarse como fundamento jurídico para justificar el mantenimiento de su privación de libertad.

21. Se indica que las 19 personas fueron acusadas de cometer “actos negligentes susceptibles de propagar una enfermedad”, en contravención del artículo 171 del Código Penal. La fuente alega que la imputación específica de esos cargos a estas 19 personas no puede justificar su prisión preventiva porque los actos prohibidos por la ley no pueden atribuirse a sus acciones y su privación de libertad carece, por tanto, de fundamento jurídico suficiente.

22. La fuente reitera que la policía afirmó que las 19 personas habían infringido el artículo 171 del Código Penal por reunirse en un lugar similar a un dormitorio común de un internado en una vivienda pequeña, desobedeciendo claramente las directivas sobre el distanciamiento físico relacionadas con la pandemia, en particular la prohibición de las reuniones de más de diez personas. La fuente afirma que no se puede acusar a esas personas de tales hechos porque, contrariamente a lo que afirma la policía, estas cumplían las restricciones establecidas por el Presidente, que ordenaban a la población, a excepción de los transportistas de carga, que permaneciera en su domicilio. La fuente argumenta que las personas cumplían de manera efectiva la directiva en el momento de su detención. Aunque la directiva presidencial limitaba el número de personas permitidas en una reunión, no establecía límites en cuanto al número de personas que podían estar en una residencia particular o en un centro privado.

23. Por lo tanto, la fuente considera que las autoridades intentan penalizar la presencia legítima de las personas en su vivienda particular. Dado que las 19 personas cumplían las directivas presidenciales, no se puede considerar que hayan infringido el artículo 171 del Código Penal. Por lo tanto, no hay fundamento jurídico para privarlas de libertad en virtud de la disposición citada, y la continuación de su privación de libertad en virtud del artículo 171 del Código Penal es arbitraria con arreglo a la categoría I.

ii) Categoría III

24. La fuente indica que se ha negado el acceso a sus abogados a las 19 personas desde su detención. Las restricciones de circulación impuestas a raíz de la COVID-19 prohíben todos los desplazamientos en vehículo privado y en transporte público, excepto los de las personas que realizan servicios esenciales. Cuando los abogados de las 19 personas presentaron una solicitud al Ministerio de Obras y Transportes para visitar a sus clientes, esta fue desestimada. La desestimación negó efectivamente a las personas el derecho a comunicarse con sus abogados, reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos, concretamente el artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a asistencia letrada también está garantizado por el artículo 28, párrafo 3 d), de la Constitución, que establece que toda persona acusada de un delito debe “ser autorizada a comparecer ante el tribunal en persona o, a sus expensas, [a ser representada] por un abogado de su elección”.

25. La fuente añade que el Servicio Penitenciario de Uganda también denegó oficialmente a las 19 personas el acceso a sus abogados. Seguidamente, estos impugnaron la legalidad de esa denegación ante el Tribunal Superior, que decretó la tramitación urgente del asunto. Los abogados también presentaron una solicitud de libertad bajo fianza ante el Tribunal de

Primera Instancia de Mpigi, en Nsangi, pero no se fijó ninguna fecha para la audiencia. Finalmente, el 12 de mayo de 2020, el Tribunal Superior ordenó que se concediera a los abogados un acceso razonable a las 19 personas.

26. Además, la fuente afirma que las 19 personas fueron obligadas a comparecer ante un juez al día siguiente de su detención sin la presencia de su abogado, lo que es contrario al derecho internacional de los derechos humanos y a la Constitución. Por consiguiente, Uganda ha violado el derecho de las personas a recibir asistencia letrada, que constituye un elemento del derecho a un juicio imparcial.

27. Por lo tanto, la fuente considera que la privación de libertad de las 19 personas ha incumplido las normas mínimas del debido proceso establecidas tanto en el derecho internacional como en la Constitución y, en consecuencia, es arbitraria con arreglo a la categoría III.

iii) Categoría V

28. Según la fuente, la privación de libertad de las 19 personas se debe a su orientación sexual o identidad de género y, por tanto, es arbitraria con arreglo a la categoría V.

29. A ese respecto, la fuente indica que, aunque tanto el derecho internacional como el ugandés (concretamente el artículo 26 del Pacto y el artículo 21 de la Constitución) garantizan la no discriminación y la igualdad de protección ante la ley, el Gobierno detuvo y encarceló de manera arbitraria a las 19 personas por su orientación sexual e identidad de género, reales o percibidas.

30. La fuente reitera que, en el comunicado inicial tras las detenciones, la policía afirmó que había hecho una redada en el centro y había detenido a las personas por violar las restricciones impuestas a raíz de la COVID-19 y que, por lo tanto, tenía la intención de acusarlas de vulnerar los artículos 171 y 117 del Código Penal. Sin embargo, los informes pusieron de manifiesto más tarde que la policía había acusado inicialmente a las personas de “acceso carnal” contrario al artículo 145 del Código Penal. La fuente especifica que la policía acusó a las personas de un delito tipificado en el artículo 145 a pesar de no haber visto a nadie mantener relaciones sexuales en el momento de la redada y las detenciones. En las imágenes de la redada difundidas en los medios de comunicación locales aparecían vecinos del centro y dirigentes de la zona declarando que estaban preocupados por el “comportamiento homosexual” de los jóvenes del centro. En las imágenes también se veía a un alcalde azotar e insultar a dos de los residentes del centro mientras les obligaba a admitir que eran homosexuales.

31. También se ha señalado que, tras las detenciones, se llevó a cabo un registro en el centro para encontrar “pruebas de homosexualidad”. Algunos de los objetos recuperados y conservados como pruebas eran varios frascos de medicamentos antirretrovíricos que se utilizan habitualmente como profilaxis anterior a la exposición, dos kits de autodiagnóstico oral del VIH y varios preservativos.

32. En opinión de la fuente, los hechos demuestran que las autoridades ugandesas están utilizando las medidas destinadas a contener la propagación de la COVID-19 para marginar aún más a poblaciones ya vulnerables y actuar de forma selectiva contra ellas, en particular las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.

33. Además, la fuente afirma que las autoridades no han indicado ningún propósito razonable o legítimo que justifique el trato diferenciado de las 19 personas privadas de libertad. Desde la aplicación de las medidas de prevención contra la COVID-19, no se han registrado redadas en otros centros, domicilios particulares o empresas similares a la redada al centro de la Children of the Sun Foundation. La fuente afirma que las 19 personas fueron detenidas bajo el pretexto de la aplicación de las medidas de prevención contra la COVID-19, a pesar de que estaban cumpliendo las directivas presidenciales. Esto demuestra que las detenciones no responden a ningún propósito legítimo u objetivo, sino que son un pretexto para actuar de forma selectiva contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en razón de su orientación sexual e identidad de género, reales o percibidas, y detenerlas, así como restringir aún más los derechos y libertades de los que deben disfrutar todas las personas en Uganda, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. A

ese respecto, la fuente recuerda que el Grupo de Trabajo ha subrayado en repetidas ocasiones que la privación de libertad por motivos de orientación sexual e identidad de género es arbitraria y está prohibida por el derecho internacional<sup>2</sup>.

34. Por consiguiente, la fuente sostiene que las acciones discriminatorias de las autoridades están en contradicción directa con el derecho internacional. Al seguir privando de libertad a las 19 personas con cargos infundados, únicamente por su orientación sexual e identidad de género, las acciones del Gobierno son discriminatorias y contravienen las garantías de igualdad de protección establecidas en el artículo 26 del Pacto y el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En consecuencia, la fuente considera que la privación de libertad de las 19 personas es arbitraria con arreglo a la categoría V.

#### *Respuesta del Gobierno*

35. El 30 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno siguiendo su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que, antes del 1 de marzo de 2021, facilitara información detallada sobre la situación actual de las 19 personas, así como sus observaciones sobre las alegaciones de la fuente. El Gobierno respondió a la comunicación el 18 de febrero de 2021. En su respuesta, el Gobierno expuso los antecedentes y las circunstancias relativas a la detención de las 19 personas, destacando las medidas que había adoptado para mitigar las consecuencias de la pandemia de COVID-19, incluida la elaboración de directrices y procedimientos operativos estándar.

36. El Gobierno califica de infundadas, injustificadas e inaceptables las alegaciones de la fuente, de las que se desprende que el Gobierno actúa de forma selectiva contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero para discriminarlas y perseguirlas por su orientación sexual. Afirma que, por el contrario, todas las personas en Uganda son tratadas por igual ante la ley, que no es discriminatoria.

37. El 18 de marzo de 2020, el Gobierno anunció una serie de medidas en el marco de los procedimientos operativos estándar concebidos para frenar la propagación de la COVID-19. Las medidas no eran discriminatorias y se aplicaron a todos los sectores de la sociedad. La detención de las 19 personas obedeció a la vulneración de las normas en relación con la COVID-19 contempladas en los procedimientos operativos estándar. Las personas se habían reunido en un dormitorio común alquilado en la ciudad de Nkokonjeru, incumpliendo esos procedimientos. Esa circunstancia suscitó la preocupación de los miembros de la comunidad local, que informaron a la policía. La policía, en cumplimiento de su mandato de garantizar la observancia de las directrices de salud pública (COVID-19), hizo una redada en el dormitorio común y detuvo a las 19 personas por conducta susceptible de propagar una enfermedad peligrosa, en contravención de las leyes de Uganda. El Gobierno negó la afirmación de la fuente de que las personas habían sido detenidas en un centro para personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, puesto que no existen centros de ese tipo en Uganda.

38. El Gobierno afirma además que, tras su detención, las 19 personas fueron procesadas ante el Tribunal de Primera Instancia de Nsangi y acusadas de cometer actos negligentes susceptibles de propagar una enfermedad, en contra de lo dispuesto en el artículo 171 del Código Penal. Ingresaron en régimen de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Kitalya el 31 de marzo de 2020. Fueron puestas en libertad el 19 de mayo de 2020, cuando se retiraron los cargos contra ellas a raíz de una directiva del Gobierno destinada a reducir el número de personas en los establecimientos penitenciarios en el contexto de la pandemia.

39. El Gobierno aclara que, contrariamente a lo que afirma la fuente, las 19 personas no fueron acusadas con arreglo al artículo 145 del Código Penal en razón de su orientación sexual.

40. El Gobierno también explica que, de acuerdo con las directrices legales establecidas, en el establecimiento penitenciario las 19 personas compartían pabellón con otros reclusos. Sin embargo, a las dos semanas de su encarcelamiento, trascendieron quejas de otros reclusos

<sup>2</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 14/2017.

sobre las prácticas sexuales de las 19 personas. Las autoridades penitenciarias abrieron una investigación y determinaron que las 19 personas estaban manteniendo relaciones homosexuales, en contravención de las normas del establecimiento penitenciario. Se procedió a separar a esas personas en diferentes pabellones con el fin de impedir que practicasen esos actos ilegales, y se conminó a las personas implicadas a que dejaran de practicarlos.

41. El Gobierno rechaza la alegación de la fuente de que se negó a las 19 personas el acceso a representación letrada, y afirma que el 8 de mayo de 2020 sus representantes legales escribieron al Director de la Fiscalía para pedir una revisión de los cargos. El 15 de mayo de 2020, dos abogados de la organización no gubernamental Human Rights Awareness and Promotion Forum visitaron el establecimiento penitenciario de Kitanya con una carta en la que se les autorizaba a entrevistarse con los reclusos para proporcionarles asistencia jurídica. Las autoridades penitenciarias recibieron a los abogados y les facilitaron un espacio para reunirse con sus clientes. Los abogados no denunciaron en ningún momento que se les impidiera acceder a sus clientes.

42. El Gobierno rechaza como infundada la alegación de que las 19 personas fueron torturadas. Afirma que ni ellas ni sus abogados presentaron ninguna denuncia de tortura entre el momento de la detención y su puesta en libertad.

43. Para terminar, el Gobierno afirma que es plenamente consciente de sus obligaciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos y que su compromiso con la promoción de los derechos humanos se basa en su experiencia y en su historia, que considera importante para el país y su población. Entre las medidas que ha adoptado para promover la observancia de los derechos humanos en Uganda figuran la creación de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda y la integración de un enfoque de derechos humanos en todos sus planes de desarrollo. Rechaza todas las insinuaciones de que las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero son objeto de discriminación.

#### *Comentarios adicionales de la fuente*

44. El 19 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo pidió a la fuente que presentara comentarios sobre la respuesta del Gobierno. La fuente aportó sus comentarios en una comunicación dirigida al Grupo de Trabajo.

45. La fuente señala que el Gobierno no aportó ninguna prueba ni argumento para rebatir las alegaciones; ignoró deliberadamente determinados aspectos sustantivos de la información presentada por la fuente; y admitió directamente haber vulnerado los derechos de las 19 personas por su orientación sexual e identidad de género, reales o percibidas.

46. La fuente sostiene que la privación de libertad de estas 19 personas es arbitraria con arreglo a las categorías I, III y V por las razones expuestas en su comunicación. En resumen, la privación de libertad fue arbitraria con arreglo a la categoría I porque no había ningún fundamento jurídico que la justificara; con arreglo a la categoría III porque incumplió las normas internacionales mínimas del debido proceso; y con arreglo a la categoría V porque el Gobierno actuó de forma selectiva contra estas personas por su orientación sexual e identidad de género, reales o percibidas.

47. Según la fuente, en su comunicación demostró que el alcalde de Kyengeru, Hajji Abdul Kiyimba, y los agentes de la Fuerza de Policía de Uganda habían hecho una redada en un centro para personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero gestionado por la Children of the Sun Foundation el 29 de marzo de 2020. Durante la redada, los agentes detuvieron violentamente a varias personas, entre ellas a las 19 ya mencionadas, con el pretexto apenas disimulado de garantizar la observancia de las medidas de prevención contra la COVID-19. Los agentes gubernamentales actuaron selectivamente contra un centro conocido por ser un espacio para las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, y detuvieron de manera arbitraria y posteriormente privaron de libertad a esas 19 personas por su orientación sexual e identidad de género, reales o percibidas.

48. La fuente sostiene que la detención y la privación de libertad continuada de las 19 personas mencionadas constituye una violación atroz por el Gobierno de los siguientes derechos en virtud de diversas disposiciones de la Constitución y del derecho internacional:

el derecho a no ser objeto de detención arbitraria; el derecho al debido proceso; y el derecho a la igualdad de protección ante la ley y a la no discriminación.

49. La fuente señala que, tras varios intentos fallidos de acceder a las 19 personas para proporcionarles representación letrada, los abogados del Human Rights Awareness and Promotion Forum interpusieron una demanda ante el Tribunal Superior contra el Fiscal General de Uganda y el Comisionado General de Instituciones Penitenciarias para hacer valer el derecho constitucional de esas personas al debido proceso y a un juicio imparcial. La demanda se presentó el 24 de abril de 2020 y el Tribunal Superior dictó sentencia el 12 de mayo de 2020, en virtud de la cual se concedía acceso a los abogados. Tres abogados pudieron acceder a las personas el 15 de mayo de 2020. El Director de la Fiscalía retiró formalmente los cargos contra las 19 personas. A raíz de ello, el juez de grado I del Tribunal de Primera Instancia de Mpigi, en Nsangi, ordenó la puesta en libertad de las 19 personas, que tuvo lugar el 19 de mayo de 2020. El 5 de junio de 2020, el Tribunal Superior falló a favor del Human Rights Awareness and Promotion Forum en la demanda civil principal, y dictaminó, entre otras cosas, que el Gobierno había vulnerado los derechos de las 19 personas a un juicio imparcial y a la libertad garantizados por la Constitución, entre otros, al negarles el acceso a sus abogados. Se concedió a cada una de las 19 personas una indemnización de 5 millones de chelines ugandeses. El Estado aún no ha pagado estas indemnizaciones.

50. El Fiscal General solicitó posteriormente que se anulara la decisión, alegando que el Estado no había tenido oportunidad de intervenir en la audiencia celebrada, puesto que las restricciones de transporte impuestas por la COVID-19 le habían impedido estar representado. El tribunal desestimó este recurso el 21 de diciembre de 2020, por lo que la sentencia y la concesión de la indemnización siguen siendo válidas.

51. La fuente también informa al Grupo de Trabajo de que, tras la liberación de las 19 personas, los abogados del Human Rights Awareness and Promotion Forum presentaron una demanda contra las autoridades ugandesas por la tortura sistemática de dichas personas durante su reclusión en el establecimiento penitenciario de Kitalya y en el puesto de policía de Nkokonjeru. Las 19 personas sufrieron burlas, flagelación, un examen anal en un caso y escaldaduras, y se vieron privadas de acceso a alimentos, instalaciones sanitarias y medicamentos, entre otras cosas. Se han celebrado dos audiencias del caso en el Tribunal Superior, y estaba previsto que volviera a celebrarse otra el 9 de marzo de 2021. La fuente informa además al Grupo de Trabajo de que el Human Rights Awareness and Promotion Forum también presentó una querrela penal, en virtud de la Ley de Prevención y Prohibición de la Tortura, en el Tribunal de Primera Instancia de Wakiso contra el alcalde de Kyengera, Hajji Abdul Kiyimba, y un funcionario de prisiones, el Funcionario Principal Philimon Woniala, por su implicación en la tortura de las 19 personas. El Tribunal decretó el sobreseimiento del caso el 19 de enero de 2021.

52. La fuente afirma que, en su respuesta, el Gobierno sostiene que las leyes mencionadas y la directiva contra la COVID-19 facultaban al Gobierno y a los agentes de la Fuerza de Policía de Uganda a efectuar una redada por la fuerza en el centro de la Children of the Sun Foundation. Sin embargo, deliberadamente, el Gobierno no señala qué disposiciones específicas de las leyes y la directiva permitían su actuación del 29 de marzo de 2020. La fuente afirma que ninguna interpretación de las disposiciones de esas leyes y de la directiva faculta al Gobierno para efectuar una redada y detener y privar de libertad a personas que se encuentran en un lugar que consideran su domicilio.

53. La fuente afirma que el Código Penal tipifica como delito los actos ilícitos y negligentes susceptibles de propagar cualquier enfermedad, pero no faculta a la policía para efectuar una redada en un domicilio privado como parte de una medida coercitiva sin que se determine que efectivamente existe la probabilidad de que se propague una enfermedad. La Ley de Salud Pública faculta a los agentes de policía para inspeccionar locales, pero solo cuando “el jefe del servicio médico, un funcionario médico o la autoridad local lo autoricen de forma general o especial por escrito”. Esta disposición no faculta a la policía para efectuar redadas en locales sin autorización ni a detener a personas y privarlas de libertad, como fue el caso de las 19 personas. Asimismo, la directiva a la que hace referencia la respuesta del Gobierno faculta a los funcionarios médicos u otras personas a entrar en locales “por



instrucción escrita de un funcionario médico”<sup>3</sup>. El artículo 2, párrafo 1 e), de la directiva modificada prohibía las reuniones públicas, incluidos los mítines políticos, las conferencias y las reuniones culturales, hasta el 19 de mayo de 2020<sup>4</sup>. La directiva no contiene ninguna disposición sobre redadas invasivas, detenciones o reclusiones.

54. La respuesta del Gobierno, según la fuente, no aportó ninguna prueba o argumento que indicara que las 19 personas o el centro celebraran o planearan celebrar una reunión pública como la descrita por la norma. La fuente reitera su razonamiento de que la directiva del Gobierno exigía que todos los ugandeses, salvo los trabajadores esenciales, se quedaran en casa. La directiva no establecía limitaciones en cuanto al número de personas permitidas en un domicilio particular o un centro privado. Por lo tanto, las 19 personas cumplían la directiva al estar en su domicilio en el momento de la redada y en todo momento de interés para este caso.

55. Un examen minucioso de las disposiciones pertinentes de las leyes y la directiva mencionadas demuestra que el Gobierno, y no las 19 personas, infringió las leyes cuando efectuó una redada en el domicilio de estas personas y las detuvo y privó de libertad, todo ello sin autorización. En primer lugar, la ley solo permite la inspección de locales claramente identificados y no la realización de redadas en domicilios o la detención de personas en su domicilio. En segundo lugar, de la respuesta del Gobierno no se desprende que la policía tuviera autorización escrita para inspeccionar el centro, tal como establece la ley. El Gobierno no pudo contar con una autorización por escrito para la redada o la detención y la privación de libertad de las 19 personas, ya que esa actuación sería *ultra vires*. En tercer lugar, la conducta del Gobierno durante la redada y la detención, según la descripción de la fuente, no respalda la afirmación de que la redada fue una medida coercitiva de lucha contra la COVID-19.

56. Los agentes gubernamentales no llevaban equipo de protección personal y no había funcionarios médicos acompañándolos. Además, según la respuesta del Gobierno, después de su detención, se asignó a las 19 personas a pabellones del establecimiento penitenciario en que había otros reclusos, incumpliendo los protocolos contra la COVID-19: no se realizaron pruebas ni hubo labor de detección sistemática ni cuarentena. En cualquier caso, tras meses de retrasos y aplazamientos innecesarios, el Gobierno retiró los cargos contra las 19 personas sin aportar ninguna prueba que fundamentara sus argumentos.

57. La fuente aduce que las acciones del Gobierno fueron ilegales y motivadas por prejuicios. Dada la falta de fundamento jurídico de la redada y de la detención y la prolongada privación de libertad de ciudadanos respetuosos de la ley que cumplían plenamente la directiva de confinamiento del Gobierno, la defensa del Gobierno no tiene sentido. El Grupo de Trabajo debe descartar el razonamiento viciado del Gobierno y declarar la arbitrariedad de la privación de libertad de las 19 personas con arreglo a la categoría I.

58. La fuente afirma además que la respuesta del Gobierno apoya de hecho la alegación de que se violó el derecho de las 19 personas al debido proceso. El Gobierno admite que las personas no tuvieron acceso a sus abogados ni a ninguna forma de representación letrada durante la mayor parte del tiempo que estuvieron privadas de libertad, en contravención del derecho internacional y de la Constitución. El Gobierno afirma que las personas fueron acusadas y encarceladas en régimen de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Kitalya el 31 de marzo de 2020. Añade que, el 15 de mayo de 2020, dos abogados del Human Rights Awareness and Promotion Forum visitaron el establecimiento penitenciario de Kitalya con una carta en la que se les autorizaba a entrevistarse con los reclusos con el fin de proporcionarles asistencia jurídica, y que las autoridades penitenciarias recibieron a los abogados y les facilitaron un espacio para reunirse con sus clientes. El Gobierno confirma así que la primera vez que las personas tuvieron acceso a sus abogados o a cualquier representación letrada fue el 15 de mayo de 2020, 47 días después de su detención. El Gobierno no justificó esta flagrante violación de los derechos al debido proceso porque no existe ninguna justificación.

<sup>3</sup> Uganda, Reglas de Salud Pública (Control de la COVID-19), 2020, 24 de marzo de 2020, art. 6 1).

<sup>4</sup> Uganda, Reglas de Salud Pública (Control de la COVID-19) (Enmienda núm. 2) 2020, 8 de mayo de 2020.

59. Después de que se obligara a las 19 personas a comparecer ante un juez el 31 de marzo de 2020 sin la presencia de su abogado, los abogados del Human Rights Awareness and Promotion Forum hicieron lo posible por acceder y proporcionar asistencia jurídica a sus clientes sin éxito. Posteriormente, presentaron una solicitud al Ministerio de Obras y Transportes (organismo encargado de expedir los permisos de circulación durante el confinamiento por la COVID-19) para visitar a sus clientes, pero fue rechazada, lo que negó de hecho a las 19 personas el derecho a comunicarse con sus abogados. Las últimas gestiones administrativas de los abogados fracasaron cuando el Servicio Penitenciario de Uganda denegó oficialmente la solicitud de los abogados para acceder a las 19 personas.

60. Los abogados impugnaron la denegación de acceso a las 19 personas por parte del Gobierno ante el Tribunal Superior, que dictó una resolución por la que declaraba inconstitucional la actuación del Gobierno y lo obligaba a facilitar el acceso a los abogados. El Gobierno no permitió a los abogados acceder a las personas hasta que el Tribunal Superior dictó su resolución. Esto significa que, de no ser por esa resolución judicial, el Gobierno habría seguido vulnerando los derechos de las 19 personas al debido proceso y al juicio imparcial *ad infinitum*. Al impedir que las personas tuvieran acceso a sus abogados o a cualquier otro abogado, el Gobierno violó su derecho a la asistencia letrada, que constituye un elemento del derecho a un juicio imparcial. Por lo tanto, la privación de libertad no cumplió las normas mínimas del debido proceso previstas tanto en el derecho internacional como en la Constitución. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo debe concluir que la privación de libertad de las 19 personas fue arbitraria con arreglo a la categoría III.

61. En cuanto a la respuesta del Gobierno de que la privación de libertad de las 19 personas no se debió a su orientación sexual o identidad de género, la fuente afirma que este corrobora su argumento de que el Gobierno detuvo y privó de libertad a las personas debido a su orientación sexual o identidad de género, reales o percibidas. La fuente reitera que los informes pusieron de manifiesto que la policía inicialmente había acusado a las 23 personas de “acceso carnal” contrario al artículo 145 del Código Penal, que tipifica como delito las relaciones homosexuales.

62. Según la fuente, el Gobierno afirma que las autoridades penitenciarias recibieron quejas de otros reclusos sobre las prácticas sexuales de las 19 personas y que las investigaciones confirmaron que algunas de ellas infringían las normas penitenciarias por mantener relaciones homosexuales. Aunque, según se informa, solo algunas infringieron las normas penitenciarias, el Gobierno afirma que castigó a las 19 separándolas en pabellones diferentes, lo que constituyó un acto evidente de discriminación. Además, el Gobierno no indica ninguna finalidad razonable o legítima para actuar selectivamente contra un centro conocido por albergar a personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero ugandesas durante el confinamiento impuesto por el Gobierno y efectuar una redada en él. Las acciones discriminatorias de las autoridades están en contradicción directa con el derecho internacional y con las opiniones expresadas por el Grupo de Trabajo. Al privar a las 19 personas de libertad con cargos infundados, únicamente por su orientación sexual e identidad de género, las acciones del Gobierno fueron discriminatorias y violaron las garantías de igualdad de protección establecidas en el artículo 26 del Pacto y el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por consiguiente, su privación de libertad fue arbitraria con arreglo a la categoría V.

### Deliberaciones

63. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno las comunicaciones presentadas.

64. Para determinar si la privación de libertad de una persona fue arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia sobre la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La mera afirmación del Gobierno de que se han seguido los procedimientos

legales no basta para refutar las presunciones de la fuente<sup>5</sup>. En el presente caso, el Gobierno de Uganda ha optado, mediante su respuesta, por impugnar las alegaciones razonables formuladas por la fuente.

65. Como observación preliminar, el Grupo de Trabajo toma nota de que 19 personas fueron puestas en libertad tras la retirada de todos los cargos en su contra. No obstante, dado que fueron presuntamente objeto de graves violaciones de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo considera que es importante que emita su opinión, como ya ha hecho anteriormente en situaciones similares<sup>6</sup>.

66. Ahora le corresponde al Grupo de Trabajo evaluar las dos versiones contradictorias para determinar si la privación de libertad de las 19 personas fue arbitraria con arreglo a la categoría I, la categoría III o la categoría V, como sostiene la fuente. El Grupo de Trabajo examinará las alegaciones una por una.

### *Categoría I*

67. El Grupo de Trabajo toma nota de la declaración de la fuente de que el 29 de marzo de 2020 las autoridades efectuaron una redada en un centro en Kyengera en el que se alojaban personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Durante la redada se detuvo a un total de 23 personas, incluidas las 19 a que se refiere el presente caso. La fuente afirma que la detención se practicó sin orden judicial. De las 23 personas detenidas, 13 eran residentes del centro, 5 venían de visita de otro centro, 1 era invitada de uno de los residentes y 1 era un enfermero residente. La fuente afirma que la policía actuó de forma selectiva contra este centro y detuvo arbitrariamente a las personas por su orientación sexual e identidad de género, reales o percibidas.

68. Hay declaraciones contradictorias en cuanto a los motivos de la detención, ya que la declaración inicial de la policía afirma que las 19 personas fueron detenidas por violar las restricciones impuestas en relación con la COVID-19. Según la fuente, los informes posteriores pusieron de manifiesto que la policía había acusado a las personas de “acceso carnal” contrario al artículo 145 del Código Penal, que tipifica como delito las relaciones homosexuales.

69. En su respuesta, el Gobierno admitió la redada y las detenciones de las 19 personas y afirmó que estas se habían practicado en cumplimiento de la legislación establecida y de las normas contra la COVID-19 destinadas a evitar la propagación de la pandemia, pero no se refirió específicamente a la cuestión de si se había emitido una orden de detención, ni indicó si algunas de las personas detenidas en la redada residían en el centro en cuestión. El Gobierno declaró que las personas implicadas habían sido detenidas por presuntos “actos negligentes susceptibles de propagar una enfermedad”, en contravención del artículo 171 del Código Penal, y por “desobediencia de una orden legítima”, en contra del artículo 117 del Código Penal.

70. Sobre la base de las diferentes posiciones expuestas en las comunicaciones, el Grupo de Trabajo considera que no se presentaron órdenes de detención en el momento de la detención de las 19 personas. Recuerda que recae sobre el Gobierno la carga de refutar cualquier alegación de improcedencia que pueda hacer que una detención o privación de libertad entre en conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos. Esa carga no se ha satisfecho.

71. Como ha señalado repetidamente el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico no basta con que exista una ley nacional que autorice la detención. En cambio, las autoridades deben invocar un fundamento jurídico coherente con las normas internacionales de derechos humanos y aplicarlo a las circunstancias del caso. No parece que haya ocurrido así con las 19 personas<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> A/HRC/19/57, párr. 68.

<sup>6</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 36/2020, párr. 47.

<sup>7</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 93/2017, párr. 44; núm. 10/2018, párrs. 45 y 46; núm. 36/2018, párr. 40; núm. 46/2018, párr. 48; núm. 9/2019, párr. 29; núm. 32/2019, párr. 29; núm. 33/2019, párr. 48; núm. 44/2019, párr. 52; núm. 45/2019, párr. 51; núm. 46/2019, párr. 51;

72. El derecho internacional de los derechos humanos prevé el derecho del detenido a que se le presente una orden de detención para garantizar el control efectivo de una autoridad judicial competente, independiente e imparcial, el cual es indispensable para garantizar el derecho a la libertad y la seguridad y la prohibición de la privación arbitraria de la libertad reconocidos en los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión<sup>8</sup>. El Grupo de Trabajo reitera que toda privación de libertad sin una orden de detención válida, como en el presente caso, constituye por tanto una violación del artículo 9, párrafo 1, del Pacto.

73. Las 19 personas permanecieron en prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Kitalya durante 29 o 30 días. El Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, y debe decretarse por el plazo más breve posible<sup>9</sup>. Dicho de otro modo, en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto se reconoce que la libertad es la consideración fundamental y que la privación de libertad no es más que una excepción. Por consiguiente, la reclusión previa al juicio debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito<sup>10</sup>. Con respecto a las 19 personas que pasaron cuatro semanas en el establecimiento penitenciario de Kitalya, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno violó el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios 11, 37 y 38 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

74. Además, el Grupo de Trabajo recuerda que el acceso a asistencia letrada desde el inicio de la reclusión es una salvaguardia esencial para que la persona privada de libertad pueda impugnar el fundamento jurídico de esa medida<sup>11</sup>. El Grupo de Trabajo considera que las 19 personas no pudieron impugnar su privación de libertad con arreglo al artículo 9, párrafo 4, del Pacto y los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que no tuvieron acceso a asistencia letrada cuando comparecieron ante el juez. Habida cuenta de que ninguna de ellas pudo impugnar su privación de libertad, también vieron vulnerado su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 2 del Pacto y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

75. El Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad de las 19 personas carecía de fundamento jurídico y, por lo tanto, fue arbitraria y se inscribe en la categoría I.

---

núm. 65/2019, párr. 59; núm. 71/2019, párr. 70; núm. 72/2019, párr. 40; núm. 82/2019, párr. 74; núm. 6/2020, párr. 39; núm. 11/2020, párr. 37; núm. 13/2020, párr. 46; núm. 14/2020, párr. 49; núm. 31/2020, párr. 40; núm. 32/2020, párr. 32; núm. 33/2020, párrs. 53 y 71; y núm. 34/2020, párr. 45.

<sup>8</sup> El Grupo de Trabajo ha sostenido desde sus inicios que la práctica de detener a las personas sin una orden judicial hace que la detención sea arbitraria. Véanse, por ejemplo, las decisiones núm. 1/1993, párrs. 6 y 7; núm. 3/1993, párrs. 6 y 7; núm. 4/1993, párr. 6; núm. 5/1993, párrs. 6, 8 y 9; núm. 27/1993, párr. 6; núm. 30/1993, párrs. 14 y 17 a); núm. 36/1993, párr. 8; núm. 43/1993, párr. 6; y núm. 44/1993, párrs. 6 y 7. Para una jurisprudencia más reciente, véanse las opiniones núm. 38/2013, párr. 23; núm. 48/2016, párr. 48; núm. 21/2017, párr. 46; núm. 63/2017, párr. 66; núm. 76/2017, párr. 55; núm. 83/2017, párr. 65; núm. 88/2017, párr. 27; núm. 93/2017, párr. 44; núm. 3/2018, párr. 43; núm. 10/2018, párr. 46; núm. 26/2018, párr. 54; núm. 30/2018, párr. 39; núm. 38/2018, párr. 63; núm. 47/2018, párr. 56; núm. 51/2018, párr. 80; núm. 63/2018, párr. 27; núm. 68/2018, párr. 39; núm. 82/2018, párr. 29; núm. 6/2020, párr. 40; núm. 11/2020, párr. 38; núm. 13/2020, párr. 47; núm. 14/2020, párr. 50; núm. 31/2020, párr. 41; núm. 32/2020, párr. 33; núm. 33/2020, párr. 54; y núm. 34/2020, párr. 46.

<sup>9</sup> A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58.

<sup>10</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 38.

<sup>11</sup> Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 9 y directriz 8.

*Categoría III*

76. Para respaldar la afirmación de que la privación de libertad de las 19 personas constituyó una detención arbitraria con arreglo a la categoría III, la fuente señala que se les negó el acceso a sus abogados hasta que una resolución judicial autorizó ese acceso. Cuando los abogados presentaron una solicitud al Ministerio de Obras y Transportes para visitar a sus clientes, esta fue rechazada, lo que privó así de hecho a las personas del derecho a comunicarse con sus abogados, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, concretamente en el artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto. El derecho a asistencia letrada también está garantizado por el artículo 28, párrafo 3 d), de la Constitución, que establece que toda persona acusada de un delito penal debe “ser autorizada a comparecer ante el tribunal en persona o, a sus expensas, [a ser representada] por un abogado de su elección”.

77. La fuente afirma que las 19 personas fueron obligadas a comparecer ante un juez al día siguiente de su detención sin la presencia de su abogado, lo que vulnera el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución, en concreto el derecho a asistencia letrada, que constituye un elemento del derecho a un juicio imparcial. Según la fuente, esa circunstancia hizo que la detención de las personas fuera arbitraria con arreglo a la categoría III.

78. La fuente alega que el Servicio Penitenciario de Uganda negó a las 19 personas el acceso a sus abogados. Los abogados impugnaron la legalidad de esa denegación ante el Tribunal Superior, que dictó una sentencia el 12 de mayo de 2020 en la que autorizó el acceso a los abogados. Tres abogados pudieron acceder a las personas el 15 de mayo de 2020.

79. En su respuesta, el Gobierno rechaza la alegación de la fuente de que se negó a las 19 personas acceso a representación letrada y afirma que, el 8 de mayo de 2020, los representantes legales de esas personas escribieron al Director de la Fiscalía para pedir una revisión de los cargos. El 15 de mayo de 2020, dos abogados del Human Rights Awareness and Promotion Forum visitaron el establecimiento penitenciario de Kitulya con una carta en la que se les autorizaba a entrevistarse con los reclusos para proporcionarles asistencia jurídica. Las autoridades penitenciarias recibieron a los abogados y les facilitaron un espacio para reunirse con sus clientes. Los abogados no denunciaron en ningún momento que se les impidiera acceder a sus clientes.

80. El Grupo de Trabajo no tiene ninguna duda de que, sobre la base de las pruebas presentadas, se negó el acceso de las 19 personas a sus abogados hasta que un tribunal se pronunció en contra.

81. En opinión del Grupo de Trabajo, el Gobierno no respetó el derecho de las 19 personas a asistencia letrada en todo momento. El Grupo de Trabajo subraya que se debe disponer de asistencia letrada en todas las etapas del procedimiento penal, a saber, durante las fases de instrucción, juicio, nuevo juicio y apelación, para asegurar que se respetan las garantías de un juicio imparcial. Por lo tanto, la denegación del acceso a los abogados constituye una violación del artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto.

82. El Grupo de Trabajo considera que esta vulneración menoscabó y mermó considerablemente la capacidad de las 19 personas para defenderse en cualquier procedimiento judicial posterior. Como ha afirmado el Grupo de Trabajo, las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su privación de libertad, en particular inmediatamente después de ser detenidas, y en el momento de la detención deben ser informadas puntualmente de este derecho. El acceso a un abogado no debe restringirse ilegal o injustificadamente<sup>12</sup>.

83. El Grupo de Trabajo ya ha constatado que el Gobierno negó a las 19 personas el acceso a sus abogados hasta que el Tribunal Superior le ordenó que reconociera su derecho a la representación letrada. El Grupo de Trabajo también ha afirmado que la denegación de representación letrada constituye una violación del derecho fundamental a un juicio imparcial. El Gobierno no hizo referencia alguna al hecho de que las personas comparecieran sin abogado un día después de su detención. Esa comparecencia inicial ante un tribunal sin

<sup>12</sup> *Ibid.*, principio 9 y directriz 8.

la presencia de abogados vulneró el derecho que asistía a dichas personas en virtud del artículo 14, párrafo 3 d), del Pacto.

84. Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, El Grupo de Trabajo concluye que esas violaciones del derecho a un juicio imparcial fueron de una gravedad tal que confieren a la detención de las 19 personas un carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

#### *Categoría V*

85. La fuente señala que, en el comunicado inicial tras las detenciones, la policía afirmó que había hecho una redada en el centro y había detenido a las personas por violar las restricciones impuestas a raíz de la COVID-19 y que, por lo tanto, tenía la intención de acusarlas de vulnerar los artículos 117 y 171 del Código Penal. Sin embargo, los informes pusieron de manifiesto más tarde que la policía había acusado inicialmente a las personas de “acceso carnal” contrario al artículo 145 del Código Penal, que tipifica como delito las relaciones homosexuales. La fuente especifica que la policía acusó a las personas en virtud de esa disposición a pesar de no haber visto a nadie mantener relaciones sexuales en el momento de la redada y las detenciones. En las imágenes de la redada difundidas en los medios de comunicación locales aparecían vecinos del centro y dirigentes locales declarando que estaban preocupados por el “comportamiento homosexual” de los jóvenes del centro. En las imágenes también se veía a un alcalde azotar e insultar a dos de los residentes del centro mientras les obligaba a admitir que eran homosexuales.

86. También se ha señalado que, tras las detenciones, se llevó a cabo un registro en el centro para encontrar “pruebas de homosexualidad”. Algunos de los objetos recuperados y conservados como pruebas eran varios frascos de medicamentos antirretrovíricos que se utilizan habitualmente como profilaxis anterior a la exposición, dos kits de autodiagnóstico oral del VIH y varios preservativos. En su respuesta, el Gobierno no contestó específicamente a estas alegaciones.

87. En opinión de la fuente, los hechos demuestran que las autoridades ugandesas están utilizando las medidas destinadas a contener la propagación de la COVID-19 para marginar aún más a poblaciones ya vulnerables y actuar de forma selectiva contra ellas, en particular las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. El Gobierno niega haber utilizado las medidas de lucha contra la COVID-19 con ningún otro propósito, y mucho menos para marginar o discriminar a ningún sector de la sociedad.

88. Además, la fuente afirma que las autoridades no indicaron ningún propósito razonable o legítimo que justificara el trato diferenciado de las 19 personas privadas de libertad. Desde la aplicación de las medidas de prevención contra la COVID-19, no se han registrado redadas en otros centros, domicilios particulares o empresas similares a la redada al centro de la Children of the Sun Foundation. La fuente afirma que las personas fueron detenidas con el pretexto de garantizar la observancia de las medidas de prevención contra la COVID-19, a pesar de que estaban cumpliendo las directivas del Presidente. Para la fuente, esto demuestra que las detenciones no responden a ningún propósito legítimo u objetivo, sino que son un pretexto para actuar de forma selectiva contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en razón de su orientación sexual e identidad de género, reales o percibidas, y detenerlas, así como restringir aún más los derechos y libertades de los que deben disfrutar todas las personas en Uganda, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. A ese respecto, la fuente recuerda que el Grupo de Trabajo ha subrayado en repetidas ocasiones que la privación de libertad por motivos de orientación sexual e identidad de género es arbitraria y está prohibida por el derecho internacional<sup>13</sup>.

89. Por consiguiente, la fuente sostiene que las acciones discriminatorias de las autoridades están en contradicción directa con el derecho internacional. Al seguir privando de libertad a las 19 personas con cargos infundados, únicamente por su orientación sexual e identidad de género, las acciones del Gobierno son discriminatorias y contravienen las garantías de igualdad de protección establecidas en el artículo 26 del Pacto y el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En consecuencia, la fuente considera que la privación de libertad de las 19 personas es arbitraria con arreglo a la categoría V. El Gobierno

<sup>13</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 14/2017.

sostiene que todas las medidas adoptadas se ajustaban a la normativa destinada a frenar la propagación de la COVID-19 y se aplicaban por igual a toda la población de Uganda, y que las 19 personas simplemente se habían encontrado circunstancialmente en una situación que infringía las normas de lucha contra la COVID-19.

90. Sobre la base de los hechos expuestos por la fuente y de la respuesta del Gobierno a ese respecto, el Grupo de Trabajo considera que la orientación sexual percibida de las 19 personas fue un factor que motivó su detención y el trato que se les dio, como lo demuestra no solo el cambio de la acusación contra ellas, sino también el hecho de que la policía detuviera tanto a las personas que realmente residían en el centro y, por lo tanto, no podían haber infringido las medidas de lucha contra la COVID-19, como a las que simplemente estaban de visita. Por la forma en que se llevó a cabo la operación en el centro, el Grupo de Trabajo discierne una actitud discriminatoria contra las personas percibidas como lesbianas, gais, bisexuales y transgénero y cualquier persona “asociada” a ellos.

91. El Grupo de Trabajo reitera que las medidas o las facultades que se autoricen para hacer frente a las emergencias de salud pública deben respetar el principio de igualdad y no discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición<sup>14</sup>. Esas medidas y facultades deben tener en cuenta sus efectos dispares en los grupos vulnerables que ya se encuentren en situación de desventaja, como las personas con discapacidad, las personas de edad, las comunidades minoritarias, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, los desplazados internos, las personas afectadas por la pobreza extrema, las personas sin hogar, los migrantes y los refugiados, las personas que consumen drogas, los trabajadores sexuales y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y de género diverso, que pueden no tener la misma capacidad para cumplir las directivas sanitarias (como la obligación de aislarse en el domicilio, de pasar la cuarentena en hoteles asumiendo el costo, de no ir a trabajar o de pagar multas o fianzas), y pueden ser privados de libertad como resultado de ello<sup>15</sup>.

92. En vista de las observaciones anteriores, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad de las 19 personas también constituyó una vulneración con arreglo a la categoría V.

93. El Grupo de Trabajo aprovecha esta oportunidad para recordar que la privación de libertad por motivos de orientación sexual es arbitraria y está prohibida por el derecho internacional<sup>16</sup>.

## Decisión

94. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Douglas Tumuhimbise, Andrew Kibalama, Saddam Kateregga, Raj Jjuuko, Kelvin Kugonza, Denis Ssamula, Abbey Gwanvu, Henry Mukiibi, Kareem Yiga, Harris Tevin Kifuba, Jabel Tushabomwe, Ivan Kawooya, Ashiraf Walugembe, Jackson Mayanja, James Tendibwa, Mark Muhereza, Joel Oketch, Ronald Ssenyonga y Rodney Sheema fue arbitraria, por cuanto contravino los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, III y V.

95. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Uganda que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de esas 19 personas sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

<sup>14</sup> Deliberación núm. 11 (A/HRC/45/16, anexo II) párr. 26.

<sup>15</sup> *Ibid.*, párr. 27.

<sup>16</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 7/2002; núm. 22/2006; núm. 42/2008; núm. 25/2009 y núm. 14/2017.

96. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder a las 19 personas el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

97. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de las 19 personas y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

98. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que ponga sus leyes en conformidad con la presente opinión y con los compromisos contraídos por Uganda en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

99. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para que tome las medidas correspondientes.

100. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### **Procedimiento de seguimiento**

101. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a las 19 personas;
- b) Si se ha investigado la violación de los derechos de las 19 personas y, de ser así, el resultado de la investigación;
- c) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Uganda con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- d) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

102. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

103. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

104. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>17</sup>.

*[Aprobada el 12 de mayo de 2021]*

<sup>17</sup> Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.